


**RADICACION 2019 - 181 CONTESTACION - EXCEPCIONES - ANEXOS (3)**

william jimenez rios <williamjimenezr3h@hotmail.com>

Mar 8/09/2020 3:29 PM

**Para:** Juzgado 01 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; yvargas1@dian.gov.co <yvargas1@dian.gov.co>

 4 archivos adjuntos (1 MB)

FUNCIONES INOCENCIO.pdf; CERTIF. CONTRAL. INOCENCIO.pdf; CERTIF. PROCURADURIA INOCENCIO.pdf; CONTESTACION INOCENCIO G. S..pdf;

Buenas tardes:

Adjunto contestación demanda y excepciones proceso de la referencia, correspondiente al demandado INOCENCIO GRANADOS S, igualmente adjunto, certificado de funciones, certificados Procuraduría y Contraloría. Al tenor del num 14 art 78 CGP envío a la contraparte copia del escrito anunciado.

Atentamente,



WILLIAM JIMENEZ R  
T.P. No 11.915 CSJ

**WILLIAM JIMENEZ R**

**Abogado**

Cel: 316 7438823

**SEÑOR**

**JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

**E. S. D.**

**Medio de Control: Acción de Repetición**

**Radicación: 2019 – 0181-00**

**Demandante: U.A.E. DIAN**

**Demandados: Albeiro Freddy Patiño Velasco, y otros**

**Referencia: Contestación de la Demanda.**

**JOSE WILLIAM JIMENEZ RÍOS**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.096.251 expedida en Cali, abogado en ejercicio y con tarjeta profesional No.11.915 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado del **Sr. INOCENCIO GRANADOS SANABRIA**, cedulaado bajo el numero No. 7.219.967 conforme al poder que éste me ha otorgado, que reposa en el expediente, dentro del término legal, por medio del presente escrito comedidamente me permito formular **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**, promovida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE DIAN, pronunciándome de la siguiente manera:

#### **A LAS PRETENSIONES**

Teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda, me permito pronunciarme acerca de ellas de la siguiente manera:

A LA PRIMERA. Me opongo:

- A) Por cuanto mi mandante **NO ES RESPONSABLE NI A TÍTULO DE CULPA GRAVE, NI A TÍTULO DE DOLO**, del pago efectuado a la sociedad Global Gaming S.A. toda vez, que su actuar, estuvo enmarcado dentro de la normatividad vigente, no era competente, para dictar, proferir, expedir, ni firmar la Resolución 05072200760125, porque carecía de las facultades para ello, la referida Resolución, la dictó, expidió, profirió, revisó y firmó, como le correspondía, el Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali y.
- B) Porque la suma de la pretensión está por (\$252.302.381) dos cientos cincuenta y dos millones trescientos dos mil tres cientos ochenta y un ps., **NO CONCUERDA** con el valor pagado por las DIAN, que fue de (\$245.319.259) dos cientos cuarenta y cinco millones tres cientos diez y nueve mil dos cientos cincuenta y nueve ps. (confrontar afirmación en el folio 118 del expediente)

A LA SEGUNDA. Me opongo:

- A) Por cuanto mi poderdante **NO ES RESPONSABLE NI A TÍTULO DE CULPA GRAVE, NI A TÍTULO DE DOLO**, del pago efectuado a la sociedad Global Gaming S.A. toda vez, que su actuar, estuvo enmarcado dentro de la normatividad vigente, no era competente, para dictar, proferir, expedir, ni firmar la Resolución 05072200760125, porque carecía de las facultades para ello, la referida Resolución, la dictó, expidió, profirió, revisó y firmó, como le correspondía, el Jefe

de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali y.

- B) Porque la suma de la pretensión está por (\$252.302.381) doscientos cincuenta y dos millones trescientos dos mil trescientos ochenta y un ps., **NO CONCUERDA** con el valor pagado por las DIAN, que fue de (\$245.319.259) doscientos cuarenta y cinco millones trescientos diez y nueve mil doscientos cincuenta y nueve ps. (confrontar afirmación en el folio 118 del expediente)

A LA TERCERA. Me opongo por cuanto mi cliente **NO ES RESPONSABLE NI A TÍTULO DE CULPA GRAVE, NI A TÍTULO DE DOLO**, del pago efectuado a la sociedad Global Gaming S.A. toda vez, que su actuar, estuvo enmarcado dentro de la normatividad vigente, no era competente, para dictar, proferir, expedir, ni firmar la Resolución 05072200760125, porque carecía de las facultades para ello, la referida Resolución, la dictó, expidió, profirió, revisó y firmó, como le correspondía, el Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali.

A LA CUARTA. Me opongo por cuanto mi representado **NO ES RESPONSABLE NI A TÍTULO DE CULPA GRAVE, NI A TÍTULO DE DOLO**, del pago efectuado a la sociedad Global Gaming S.A. toda vez, que su actuar, estuvo enmarcado dentro de la normatividad vigente, no era competente, para dictar, proferir, expedir, ni firmar la Resolución 05072200760125, porque carecía de las facultades para ello, la referida Resolución, la dictó, expidió, profirió, revisó y firmó, como le correspondía, el Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali, adicionalmente, no puede al mismo tiempo, generarse intereses de mora e indexarse, por cuanto ambos son mecanismos para traer a valor presente la supuesta suma adeudada.

A LA QUINTA. Me opongo por cuanto mi mandante **NO ES RESPONSABLE NI A TÍTULO DE CULPA GRAVE, NI A TÍTULO DE DOLO**, su actuar, estuvo enmarcado dentro de la normatividad vigente y dentro de sus funciones, no era competente, para dictar, proferir, expedir, ni firmar la Resolución 05072200760125, porque carecía de las facultades para ello, la referida Resolución, la dictó, expidió, profirió, revisó y firmó, como le correspondía, el Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali.

A LA SEXTA. No me opongo, al no constituir una verdadera pretensión, pues con ella se busca simplemente el reconocimiento de un poder que se dio para presentar el medio de control respectivo.

#### **A LOS HECHOS DE LA DEMANDA:**

1. AL HECHO PRIMERO. Es cierto.
2. AL HECHO SEGUNDO. Es cierto.
3. AL HECHO TERCERO. Es cierto.
4. AL HECHO CUARTO. Es cierto.
5. AL HECHO QUINTO. Es cierto.
6. AL HECHO SEXTO. Es cierto.
7. AL HECHO SÉPTIMO. Es cierto.
8. AL HECHO OCTAVO. Es cierto.
9. AL HECHO NOVENO. Es cierto.
10. AL HECHO DÉCIMO. Es cierto.
11. AL HECHO DÉCIMO PRIMERO. El presente hecho contiene dos afirmaciones que merecen ser contestadas por separado para dar mayor claridad a lo señalado:

- 11.1. Frente a la expedición de la Sentencia por parte del Honorable Consejo de Estado en la cual se revocó la sentencia del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, esto, ES CIERTO.
- 11.2. Frente a la sustentación de la sentencia del Consejo de Estado, ES PARCIALMENTE CIERTO por cuanto la parte demandante hace una copia, sacada de contexto, del fundamento de la decisión del Consejo de Estado. Al ser una copia parcial, sacada de contexto, no se aprecia completamente lo señalado por el Honorable Consejo de Estado en cuanto a las razones para declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la administración. En efecto, se señala en la providencia, una disparidad en la interpretación de los hechos y las pruebas que se encontraron en el expediente, así como se señaló que los agentes actuaron bajo lo dispuesto en el Decreto 2685 de 1999, QUE EXISTIERON FALENCIAS Y DEFICIENCIAS EN LA MOTIVACIÓN, pero jamás, calificó el actuar de mi mandante, ni, de los demás funcionarios que participaron, con culpa grave o conducta dolosa.
12. AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO. ES CIERTO.
13. AL HECHO DÉCIMO TERCERO. Aparentemente de las pruebas allegadas, ES CIERTO.
14. AL HECHO DÉCIMO CUARTO. ES CIERTO.
15. AL HECHO DÉCIMO QUINTO. Aparentemente de las pruebas allegadas, ES CIERTO.
16. AL HECHO DÉCIMO SEXTO. Aparentemente de las pruebas allegadas, ES CIERTO.

### EXCEPCIONES PERENTORIAS.

Presento ante usted las siguientes excepciones:

#### 1. INEXISTENCIA TOTAL DE CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA, POR AUSENCIA DE DESVIACIÓN DE LA REALIDAD.

Se plantea la presente excepción teniendo en cuenta que, para que proceda la acción de repetición, es necesario que la conducta del agente estatal sea consecuencia de su actuación dolosa o gravemente culposa, LO CUAL, NO HA OCURRIDO EN EL PRESENTE CASO, por cuanto la Sentencia de Segunda Instancia (señaló, que la nulidad de los actos administrativos, que dieron lugar al restablecimiento del derecho) se da, “POR SERIAS FALENCIAS EN MATERIA DE MOTIVACIÓN”, NO, POR DESVIACION DE LA REALIDAD U OCULTAMIENTO DE LOS HECHOS, BAJO ESTA PREMISA, MAL PUEDE PRESUMIRSE DOLO, DE MI REPRESENTADO, AL TENOR DEL ARTICULO 5 (QUINTO) NUMERAL 3 DE LA LEY 678 DE 2001, SIENDO ASI, QUEDA DESVIRTUADA CUALQUIER PRESUNCION DE DOLO, COMO LO PRETENDE PRESENTAR LA APODERADA DE LA DIAN, ESTAMOS, FRENTE A UNA ACCION DE REPETICION TEMERARIA, SIN FUNDAMENTO, REITERO, PORQUE NO SE HA PRESENTADO PRUEBA DE LA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA CONTRA EL DEMANDADO.

La actuación de mi cliente, se basó en hechos, que sí se probaron dentro de la actuación administrativa (como la existencia de piezas de fechas distintas a las de la declaración de Importación de las máquinas aprehendidas) hechos aceptados en la contestación de la demanda por la apoderada de la DIAN, pero que no fueron alegados ni sustentados en el desarrollo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ya, que, no presentó excepciones, ni petición de interrogatorio de parte, ni solicitó testigos, ni ningún tipo de pruebas, se limitó olímpicamente, a pedirle al despacho que las solicitara a la Administración de Aduanas de Cali, sin indicar cuáles, ni justificar porque no las aportaba, lógicamente, el despacho no podía solicitarlas, primero, porque no le correspondía, segundo, porque han debido aportarse con la contestación, porque su representado las tenía en su poder y tercero, porque no se le indicó qué pedir y, como si esto fuera poco, ni siquiera habló con mi representado, ni con los funcionarios que actuaron en la investigación, LAS FALENCIAS DE LA DEFENSA, ORIGINARON LA CONDENA DE LA DIAN.

La actuación administrativa se tramitó cuidadosamente, con la participación de varios funcionarios, más de 6 (seis), siendo así, no cabe la posibilidad, de que mi poderdante, haya actuado con arreglos a **CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA, POR AUSENCIA DE DESVIACIÓN DE LA REALIDAD**, ya, cualquiera de los funcionarios, tenía la oportunidad de advertir y corregir algún error.

Así las cosas, no es posible que exista conducta **DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA DE MI MANDANTE (EN TÉRMINOS CIVILES)** por cuanto su actuar, fue diligente, basado en pruebas, sin tergiversar los hechos y sin ninguna intención de producir daño, sólo, hacer cumplir las normas aduaneras aplicables al caso, en todas las actuaciones precedentes a la Resolución final, no hubo actuaciones aisladas del ordenamiento legal, quienes participaron, (6 funcionarios) ajustaron sus actuaciones a derecho, tan cierta esta apreciación, que la DIAN, hasta la fecha, no ha iniciado, ningún proceso disciplinario contra mi representado.

Mi poderdante y la división de fiscalización, actuó, a través de su grupo operativo, bajo los parámetros de un programa de control a nivel nacional, con el fin de controlar el contrabando técnico de este tipo de máquinas de casino. En el caso concreto, se trataba de máquinas usadas, sin licencia de importación, que habían sido nacionalizadas como nuevas, las cuales no necesitaban licencia de importación, la participación de mi representado se ajustó a derecho, solicitó a los tenedores de las máquinas los documentos requeridos, que demostraran la legal introducción al territorio aduanero nacional, y verificó, si eran nuevas o usadas, mediante una inspección a los elementos integrantes de sus dispositivos electrónicos, que tienen impresos, el año de fabricación y lote correspondiente.

Siendo, varios los funcionarios que participaron, cada uno, con sus funciones, competencia y responsabilidad delimitadas, es alegre pensar, que se hubieran puesto de acuerdo para violar la ley y actuar bajo conducta dolosa o gravemente culposa, todos los que participaron, tenían no solo el conocimiento, sino, la competencia y obligación, para corregir cualquier error y recomponerlo, ha podido llegar, hasta ordenar abrir un nuevo proceso, y esto nunca ocurrió, porque todo el procedimiento se ajustó a ley; que la DIAN, con todos sus controles y auditorias, no haya iniciado los procesos disciplinarios exigidos en estos casos, es la mejor prueba, del actuar, ajustado a la ley de mi mandante.

Todo lo expresado, conduce, necesariamente, a que esta excepción, se declare probada.

## **2. INEXISTENCIA DE CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA, POR AUSENCIA DE OCULTAMIENTO DE LOS HECHOS QUE SIRVEN DE SUSTENTO A LA DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.**

Se plantea la presente excepción teniendo en cuenta que, PARA QUE PROCEDA LA REPETICIÓN ES NECESARIO QUE LA CONDUCTA DEL AGENTE ESTATAL SEA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA, no existe esta calificación, por cuanto la Sentencia de Segunda Instancia (que señaló la nulidad de los actos administrativos que dieron lugar al restablecimiento de derecho) **SEÑALA, QUE LA NULIDAD SE DA, COMO CONSECUENCIA DE “FALSA MOTIVACIÓN” EN LA EXPEDICIÓN DE DICHOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, Y NO, POR OCULTAMIENTO DE LOS HECHOS, NI POR CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA DE MI DEFENDIDO.**

Esto es así, por cuanto en todas las actuaciones (administrativas y judiciales) nunca se mencionó o esgrimió que existiera situación alguna de ocultamiento de los hechos por parte de mi mandante, todo lo contrario, dentro del debate argumentativo de la sociedad Global Gaming S.A. y la DIAN existió, con el departamento jurídico, un debate franco acerca de la interpretación de los hechos en los que se basaron los actos administrativos anulados.

En consecuencia, **AL NO MENCIONARSE, EN NINGUNA DE LAS SENTENCIAS, OCULTAMIENTO DE HECHOS RELEVANTES, MAL PUEDE ENDILGARSE, CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA, EN EL ACTUAR DE MI MANDANTE.**

Por las razones expuestas, la presente excepción, debe declararse probada.

### **3. INEXISTENCIA DE CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA, POR VIOLACIÓN DE LA LEY.**

Se plantea la presente excepción teniendo en cuenta que para que proceda la repetición, ES NECESARIO QUE LA CONDUCTA DEL AGENTE ESTATAL SEA CONSECUENCIA DE SU CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA (en términos del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, que el agente, quiera la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado), lo cual, NO OCURRIÓ, POR CUANTO LA ACTUACIÓN DE MI MANDANTE SE BASÓ EN EL CONVENCIMIENTO DE ESTAR CUMPLIENDO LA LEY Y ACTUAR CONFORME A ELLA, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUJERON ESTUVIERON BASADOS EN NORMAS APLICABLES AL CASO, JAMAS EXISTIO, VIOLACION DE LA LEY.

Siendo varios los funcionarios que participaron, cada uno con sus funciones, competencia y responsabilidad delimitadas, atrevido pensar, que alguno de ellos o todos, hubieran actuado equivocadamente o hubieran actuado bajo conducta dolosa o gravemente culposa, con la intención de violar la ley, todos los que participaron, tenían no solo el conocimiento, sino la competencia para corregir, cualquier error y recomponerlo, han podido llegar, hasta ordenar abrir un nuevo proceso.

En el proceso administrativo, Global Gaming S.A., jamás manifestó que se estuviera violando la ley, si esto hubiera ocurrido, se hubiera corregido la situación y se hubiera iniciado la necesaria investigación disciplinaria, contra mi mandante y/o demás funcionarios, circunstancia que nunca ocurrió, como lo pruebo con las certificaciones que anexo, de la Procuraduría, Contraloría y Dirección de Gestión de Personal de la DIAN.

Esto es así, porque la razón de la anulación de los actos administrativos no fue, por ausencia de norma que sustentara la actuación de la entidad, fue, por **SERIAS “FALENCIAS EN MATERIA DE MOTIVACIÓN”, JAMÁS, SE CONSIDERÓ CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA.**

Incluso, el mismo Consejo de Estado reconoce que la actuación adelantada por los agentes, estuvo enmarcada dentro de las facultades establecidas por el Decreto 2685 de 1999.

Siendo así, las **“FALENCIAS EN MATERIA DE MOTIVACIÓN”**, (que es el fundamento de la anulación del acto administrativo por parte del Consejo de Estado), **NO SUPONEN EN SÍ MISMA, UNA VIOLACIÓN A LA LEY.**

Al no existir violación a la Ley sino, **“FALENCIAS EN MATERIA DE MOTIVACIÓN”**, no es posible que se endilgue ahora, que existe conducta dolosa o gravemente culposa en el actuar de mi representado.

Por lo expuesto, esta excepción, debe declararse probada.

### **4. INEXISTENCIA DE CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA POR AUSENCIA DE DESVIACIÓN DE LA REALIDAD EN LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.**

Esta excepción se plantea teniendo en cuenta, que la actuación administrativa llevada a cabo, en cuanto a la notificación, en contra de la sociedad Global Gaming S.A. no fue objeto de reproche, pues como lo reconoció el Honorable Consejo de Estado, el

procedimiento de notificación llevado a cabo permitió el ejercicio de los derechos de dicha sociedad.

Así las cosas, no puede existir conducta dolosa o gravemente culposa, al no haberse cometido conducta consciente tendiente a violar la ley sobre el procedimiento de notificación al particular, pues mi mandante, no realizó el procedimiento de notificación del acta de aprehensión, así como tampoco se discutió dentro de la instancia judicial ilegalidad alguna en la forma de notificación de las Resoluciones No. 0507021063600005783 del 23 de octubre de 2006 y No. 05072200760125 del 5 de febrero de 2007.

En ese sentido, **NO PUEDE ENDILGARSE PRESUNCIÓN DE CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA Y RESPONSABILIDAD A MI MANDANTE, AL NO HABER REALIZADO LA CONDUCTA, NI AL HABERSE DISCUTIDO LA LEGALIDAD DE DICHO PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DENTRO DE LA DECLARATORIA DE LA NULIDAD.**

Bajo la argumentación expuesta, esta excepción, debe declararse probada.

#### **OBSERVACIONES APLICABLES A LAS EXCEPCIONES 1, 2, 3 Y 4.**

La participación de mi representado, **NO ALCANZA A TENER LA VIRTUALIDAD NECESARIA PARA CATALOGAR SU ACTUACIÓN DE GRAVEMENTE CULPOSA O DOLOSA**, calificativos que resultan indispensables, imprescindibles, para acceder a las pretensiones de la acción de repetición, siendo así, no se encuentra acreditado el requisito de culpa grave o dolo en cabeza de mi poderdante, como presupuesto para la procedencia de la acción de reparación incoada por la DIAN, en contra de mi cliente.

#### **NORMAS SUSTANCIALES VIOLADAS.**

Al tenor del art 83 de la Constitución, **NO PUEDE PRESUMIRSE LA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA DE MI MANDANTE, YA, QUE LA BUENA FE SE PRESUME** en las actuaciones de los particulares, autoridades públicas y funcionarios de la DIAN, como servidores públicos, (DECRETO 1072 DE 1999) de un servicio público esencial, denominado Servicio Fiscal y se desarrolla, bajo los principios de buena fe.

*Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. (Subrayado propio)*

Y el artículo 90 de La Constitución se establece, que el Estado, cuando haya sido condenado por daños antijurídicos **DEBERÁ REPETIR** contra los funcionarios, **CUANDO LA REPARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS DAÑOS, HAYA SIDO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA DEL AGENTE.**

*Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. (Subrayado propio)*

Con la demanda tan sólo se aportó, copia simple que dice contener una sentencia proferida por el Consejo de Estado, donde se declara la nulidad de la Resolución No. 05072200760125 del 5 de febrero de 2007 y se condena a la DIAN al pago a favor de Global Gaming S.A. de la suma de \$252.302.381, indicando, que el daño se había causado por **“FALENCIAS EN MATERIA DE MOTIVACIÓN”, JAMÁS, POR CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA DE MI MANDANTE.**

Con base en las normas Constitucionales y considerando, que en la sentencia no se establece la conducta dolosa o gravemente culposa de mi mandante, deben declararse probadas las excepciones 1, 2, 3 y 4.

### **JURISPRUDENCIA.**

Jurisprudencia Aplicable a las excepciones. 1, 2, 3 y 4.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ Bogotá, D.C., julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-26-000-2003-00057-01(25659)

(...)  
“...Imposibilidad de deducir responsabilidad al demandado de quien no se predica ni hay antecedente probatorio que indique que su actuación estuvo viciada con dolo o culpa grave...” (Subrayado propio)

(...)  
“...la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: (subrayado propio)

(...)  
“iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; y v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico...”  
 (Subrayado propio)

Sentencia C-832 de 2001 de la Corte Constitucional.

(...) “Define la acción de repetición como una facultad que la administración Pública posee para obtener el reintegro de los montos condenado a pagar, por los daños jurídicos que este causo, a través de sus funcionarios o servidores públicos, la cual requiere de unos REQUISITOS PARA ACCIONARSE (Mestre, 2004) indica; 1. Que haya sido condenada la entidad pública por la jurisdicción contencioso administrativa a indemnizar los daños causados al particular 2. Que el daño antijurídico sea la consecuencia de la consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario, ex funcionario público o particular investido con funciones públicas”. (...)

No todas las actuaciones de los funcionarios o servidores públicos que hayan generado daño son materia de la acción de repetición, sólo aquellas, donde se demuestre, el dolo o la culpa grave en la acción realizada, serán llamados a responder en la acción de repetición.

## DOCTRINA DIAN.

OFICIO 01310 31 - 07- 2018 DIAN Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina Bogotá, D.C. 100208221- 001310 Doctora: BLANCA DEICY ZAMORA RESTREPO.

“Sobre este tema en sentencia del Consejo de Estado Sección Tercera del 24 de marzo de 2017 con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 10010326000201400026 00 (50.032) se reiteró acerca de los elementos para la procedencia de la acción de repetición explicando lo siguiente:

### **“3.1) Elementos para la procedencia de la acción de repetición.**

La Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes:

#### i). La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena.

La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o exfuncionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado.

ii). La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

iii). El pago efectivo realizado por el Estado.

La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación.

#### iv). La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables” (Subrayado y negrillas propios)

## 5. COMPORTAMIENTO CUIDADOSO Y DILIGENTE.

Esta excepción se plantea teniendo en cuenta que la actuación de mi poderdante se enmarcó dentro de lo establecido por el Decreto 2685 de 1999, así como en el Manual de Funciones que regía para la época en la cual se desarrollaron los hechos.

Esto es así, por cuanto mi mandante no desatendió los deberes legales y reglamentarios establecidos para su cargo, no actuó solo, todo lo contrario, actuó un colectivo de la administración, que tuvo el mayor cuidado y diligencia en el cumplimiento de sus deberes funcionales y misionales, que garantizaron dentro de la actuación administrativa, los derechos de la sociedad demandante, actuando siempre, a lo dispuesto en el Decreto 2685 de 1999, prueba de ello, que nunca se le abrió, investigación disciplinaria, tampoco a los demás del grupo.

No se afirma en ninguna de las instancias del proceso, que mi mandante haya actuado en forma descuidada o sin diligencia, tampoco, que haya incurrido en conducta dolosa o gravemente culposa, las pruebas y hechos que se dieron durante la actuación administrativa, tampoco lo menciono.

Con fundamento en lo expuesto, solicito, declarar probada esta excepción.

## 6. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS FUNCIONARIOS EN LA CONDENA RESARCITORIA.

Esta excepción se formula teniendo en cuenta que la demanda pretende resarcir el pago realizado por el Estado, con una demanda de repetición, contra 6 demandados, cuando **NO SE HA DEFINIDO LA RESPONSABILIDAD DE MI REPRESENTADO, TAMPOCO SE HA PROBADO SU CONDUCTA DOLOSA, NI GRAVEMENTE CULPOSA, NO SE DETERMINA LA CUANTÍA DE LA RESPONSABILIDAD DE CADA UNO, SE PRETENDE UNA SOLIDARIDAD**, sin ningún fundamento, al tener cada uno de los demandados funciones precisas, mal puede predicarse solidaridad, la responsabilidad, es, de quien se le pruebe conducta dolosa o, gravemente culposa y de quien dictó, expidió, profirió y firmó la Resolución No. 05072200760125 del 5 de febrero de 2007.

### CÓMO FUNCIONA LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA DIAN:

Estaba conformada en aquella época por varios grupos internos:

- 1-Grupo de Secretaria,
- 2-Grupo Operativo,
- 3-Grupo Sanciones y definición de situación jurídica,
- 4-Grupo de investigaciones aduaneras.

La interacción de estos grupos, que actúan al tenor de las funciones de cada uno y procedimiento establecidos, no permite que se emita, una decisión solidaria de los participantes de los grupos, la responsabilidad es individual y debe ser probada, su culpa o dolo.

Esta información para ilustrar al despacho del procedimiento interno, para reforzar lo expuesto en las distintas excepciones, por lo que:

- 1) No puede predicarse solidaridad de los distintos funcionarios, cada uno tiene funciones precisas e independientes,
- 2) Si en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se llamó en garantía a mi cliente, no procede la acción de repetición y,
- 3) Que, si no definió en la sentencia, la conducta dolosa o gravemente culposa, de mi poderdante, no puede ser sujeto pasivo de la acción.

## JURISPRUDENCIA CORTE CONSTITUCIONAL.

Así lo expone la Corte Constitucional en Sentencia C-965 de 2003, en los siguientes términos:

(...)

“Y en último caso está la acción de repetición ordinaria o de repetición propiamente dicha, definida en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001 como una acción independiente y autónoma, de naturaleza civil y carácter patrimonial, que debe ejercerse contra el servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa ha dado lugar a que se condene al Estado a pagar una indemnización. En punto a la acción de repetición, de la definición se extrae que se trata de una acción obligatoria y no facultativa, y que debe ejercerse por el Estado siempre que concurren los siguientes presupuestos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; y (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia”...) (Subrayado propio)

Aunado a lo anterior (esto es, que ni las normas ni la jurisprudencia han establecido algún supuesto de solidaridad), no es posible establecer la solidaridad de funcionarios, ya, que se debe analizar de manera particular si la conducta del agente, generó o no, el daño antijurídico, lo cual no ocurre dentro del presente caso, ni en la demanda, ni en las distintas sentencias se indicó, cuál fue la responsabilidad por conducta dolosa o gravemente culposa de mi mandante.

Las pretensiones de la demanda, planteadas en bloque contra 6 (seis) demandados, sin definir la responsabilidad individual, no es viable procesalmente, la solidaridad no se presume, debe estar, claramente definida.

(...)

“...no puede ser condenado porque la solidaridad prevista en el artículo 2344 del Código Civil sólo se predica respecto de la responsabilidad por daños derivada de hechos ilícitos cuestión muy distinta a la analizada en este proceso”. (Subrayado propio)

Al tenor de la anterior Jurisprudencia, se deben despachar desfavorablemente las pretensiones de la parte demandante, al pretender establecer, UNA CONDENA SOLIDARIA, sin cumplir con los presupuestos para que se dé la misma.

Por las razones expuestas la presente excepción, debe declararse probada.

## 7. AUSENCIA DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Se propone la presente excepción teniendo en cuenta que el artículo 19 de la Ley 678 de 2001 indica que se debe realizar el llamamiento en garantía al servidor público cuando se promueva el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no se hizo.

Si se observa el procedimiento llevado a cabo en la instancia judicial correspondiente, es claro que la apoderada de la demandada, Dra. Gloria Amparo Arboleda Henao, no llamó en garantía a mi mandante, no propuso excepciones, tampoco lo llamó como testigo y más grave aún, ni siquiera hablo con él, para conocer sus comentarios, lo desconoció olímpicamente, con dicho procedimiento, perjudicó a su representado la DIAN, además, dicha institución, jamás le abrió proceso disciplinario, porque siempre tuvo claro, y así se

deduce, de la contestación de la demanda, de que había actuado ajustado a la ley; al no llamar en garantía, a mi poderdante, este no tuvo oportunidad de defenderse, ni controvertir las pruebas presentadas, si se le impidió hacerlo, mal puede ahora, ser sujeto de la acción de repetición en su contra, se le violó, el debido proceso.

El llamamiento en garantía con fines de repetición debe ser efectuado en el término que se tiene para contestar la demanda, es decir, antes de que se de apertura al periodo probatorio.

No debe perderse de vista que cuando el Agente Estatal no ha participado en el proceso en el que se determina la responsabilidad estatal, por no haber sido llamado en garantía, las opiniones o conceptos expresados en la sentencia, en relación con su conducta o actuación, no son plena prueba contra dicho agente, por no haberse agotado el principio de contradicción.

## **JURISPRUDENCIA.**

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ Bogotá, D.C., julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-26-000-2003-00057-01(25659)

(...) “imposibilidad de vincular procesalmente al demandado faltando el supuesto del llamamiento en garantía indispensable, como nexo vinculatorio en el proceso donde se dictó la condena. La cual fundamentó en que nadie puede ser condenado con ocasión de un proceso en el cual no se le dio la oportunidad de intervenir...” (Subrayado propio)

Por las razones expuestas la presente excepción, debe declararse probada.

## **8. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL O PATRIMONIAL POR NO HABER PROFERIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO.**

Se propone esta excepción en consideración, a que mi representado, no tenía las facultades y/o funciones para proferir el acto administrativo, competencia, que únicamente estaba radicada, en cabeza del Jefe de División o Jefe del G.I.T. El acto administrativo, que generó la demanda de GLOBAL GAMING S.A., fue proferido por el Jefe de División, Director del Departamento Jurídico, quien era el funcionario, con las facultades para ello y, por consiguiente, su único responsable.

- El Acto Administrativo base de la Nulidad y restablecimiento del Derecho, Resolución 05072200760125 del 5 de febrero de 2007, tiene plena validez y cumple con las formalidades que exige la ley, de allí, que la responsabilidad fiscal o patrimonial solo puede predicarse, respecto del funcionario, que lo dicto, expidió, profirió y firmo, jamás, sus consecuencias pueden imputarse a quienes participaron en la misión.

Mi representado, no profirió el acto Administrativo, no estaba dentro de sus funciones hacerlo, su participación, fue meramente misional, misión, que nunca le fue reprochada, ni personalmente, ni en forma oficial, a través de ningún pronunciamiento oficial, concretamente, a través de un proceso disciplinario, como se pronuncian las instituciones, cuando sus funcionarios actúan por fuera de sus funciones o la ley.

Su actuación estuvo enmarcada por las exigencias del Decreto 2685 de 1999, y nunca fue cuestionada, ni desvirtuada por el funcionario competente de la División jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, a tal punto, que, con ocasión de la interposición del Recurso de Reconsideración, por parte GLOBAL GAMING S.A., mediante Resolución 05072200760125 de 5 de febrero de 2007 profirió, revisó y confirmó en todas sus partes las actuaciones adelantadas.

Su actuar siempre estuvo precedido del espíritu de justicia, respetando el principio constitucional del Debido Proceso y el Derecho de Defensa. Fue así, como al interesado no solo se le permitió la defensa de sus intereses dentro del proceso, sino, que igualmente, se practicaron las pruebas idóneas, necesarias y conducentes para llegar a tomar la decisión en derecho, actuación esta, que nunca ha sido cuestionada.

La División jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, profirió el Acto Administrativo, después de revisar toda la actuación, agotados todos los recursos y ajustado a la ley.

Mi representado actuó conforme a derecho, como se encuentra demostrado, nunca se le ha endilgado, que su actuar, se hubiera llevado a cabo con artificios, ni deliberadamente con la voluntad propia de hacerle daño al demandante, no se probó a lo largo del proceso, que hubiese actuado con conducta dolosa o gravemente culposa, el DOLO no se presume, debe probarse, siendo así, mi representado debe ser eximido de toda responsabilidad.

La Resolución 05072200760125 de 5 de febrero de 2007, no fue expedida, ni proferida, ni firmada por mí representado, lo afirma, concluyentemente, la apoderada de la DIAN, en el hecho OCTAVO de la demanda, cuando dice que la expidió la Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santiago de Cali y no solo lo afirma, sino, que anexa como prueba, la descripción de funciones que aparecen el expediente, expedida en el año 2007, por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Subsecretaría de Desarrollo Humano, documento distinguido con el nombre de: DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DEL ROL, también, estoy aportando, como prueba, certificado actualizado de funciones, suscrito por el SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

Por los motivos expuestos, la presente excepción, debe declararse probada.

## **JURISPRUDENCIA.**

**Sentencia 2016-01071 de mayo 17 de 2018**

CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN SEGUNDA  
SUBSECCIÓN A  
Consejero Ponente  
Rafael Francisco Suárez Vargas  
Bogotá, D.C. (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  
Rad.: 110010325000201601071 00

*(...) “competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinada función”*

*(...) “facultades para hacerlo; es decir, que tengan atribuciones para expresar la voluntad de la Administración o de la ley en el acto administrativo. Cuando un funcionario atribuyéndose facultades que no le corresponden profiere un acto, está en una situación de incompetencia, lo que genera vicio en el mismo; en este aspecto, estamos frente al factor negativo de la competencia”.*

*(...) “Los elementos de validez a los que hace alusión la jurisprudencia cuyo desconocimiento acarrea la nulidad del acto administrativo son : i) los sujetos, diferenciados entre activo o quien expide el acto y quien debe gozar de competencia y voluntad para emitirlo, y el pasivo, esto es, sobre quien recaen sus efectos, ii) el objeto o contenido del acto que determina la situación jurídica que se va a afectar con este, que en todo caso debe ser lícito, posible y existente, iii) los motivos o razón de hecho o de derecho determinantes que impulsaron la emisión del acto, iv) los fines o lo que la administración pretende alcanzar*

*con la expedición del acto administrativo, que debe ser el interés general, y v) la formalidad, concepto que encierra indistintamente los de procedimiento, forma y formalidad. Así, el primero indica que para expedir el acto debe seguirse un trámite determinado, el segundo señala que debe ser expedido de acuerdo con su contenido y alcance ya sea mediante leyes, resoluciones, acuerdos, etc., y el tercero advierte los requisitos que debe acatarse para la expedición”.*

## **9. EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDENTIDAD EN LAS PRETENSIONES, POR NO CONCORDAR, LO REALMENTE PAGADO, CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.**

Esta excepción se plantea teniendo en cuenta, que el valor pagado fue de (\$245.319.259) dos cientos cuarenta y cinco millones tres cientos diez y nueve mil dos cientos cincuenta y nueve ps., y el valor de las pretensiones Primera y Segunda es de (\$252.302.381) dos cientos cincuenta y dos millones trescientos dos mil tres cientos ochenta y un ps., no concuerda con el valor pagado por la DIAN, (confrontar afirmación en el folio 118 del expediente) al tenor de lo expuesto, la presente demanda debió ser inadmitida al tenor de los 170 y numeral 2 art 162 cpaca.

El demandante manifestó en la demanda, que estimaba las pretensiones en (\$252.302.381) dos cientos cincuenta y dos millones trescientos dos mil tres cientos ochenta y un ps., al no haber presentado juramento estimatorio, no puede cambiar lo que expresamente y puntualmente señaló en el libelo. Oportuno anotar que el juramento estimatorio no es un requisito de admisibilidad de la demanda en lo contencioso administrativo, sino, un medio de prueba para la indemnización de perjuicios.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso, Auto del 24 de septiembre de 2015, Expediente: 25000234100020140126001 estimó, “que la falta del juramento estimatorio, de conformidad con el numeral 6 del artículo 90 del mismo Estatuto, da lugar a la inadmisión de la demanda, en virtud de la remisión normativa que trae el artículo 306 del CPACA al considerarla una disposición compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones correspondientes a esta jurisdicción, y toda vez, que la Ley 1437 de 2011 no tiene pronunciamiento expreso al respecto, lo contemplado en el Código General del Proceso le es aplicable”.

Cuando el demandante, no tiene claras las pretensiones de la demanda, como el caso que nos ocupa, se dará aplicación el art. 306 CPACA, que consagra la remisión normativa a las normas procesales civiles, para los asuntos no regulados en cuanto le sean compatibles. La transparencia y la lealtad procesal imponen a la parte indicar con exactitud cuáles son sus pretensiones y qué pruebas pretende oponer a la parte demandada para sacarlas adelante, no puede pretenderse una cuantía en las pretensiones y otra, en la prueba del valor real pagado, (requisito para las acciones de repetición).

En las anteriores condiciones, queda claro, que el demandante, al no tener como prueba el juramento estimatorio, ni una pretensión clara, precisa y razonada, no podrá ahora, aprovecharse de ello, para corregir su confusión creada en las pretensiones, sería inoportuno; aceptado, que dicha omisión, no traerá las sanciones del CGP, no es menos cierto, que le trae la sanción, de no poder corregir su inexactitud, entre lo pretendido, con lo pagado.

La incongruencia de las pretensiones de la demanda, con la prueba del valor pagado realmente por la DIAN, genera, la inadmisión de la demanda al tenor de los Artículos 162 y 170 cpaca.

*Artículo 162. Contenido de la demanda.*

(...)

**2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.** Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. (Subrayado propio)

**Art. 170 Inadmisión de la demanda.**

*Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda.*

Por la razón expuesta, solicito declarar probada la excepción.

**10. EXCEPCIÓN GENÉRICA.**

Todas aquellas que se logren probar dentro del proceso.

**FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA DEFENSA**

Para fundamentar la defensa, se hace necesario mencionar las siguientes normas:

1. Si bien el artículo 5.3 de la Ley 678 de 2001 hace una presunción de dolo cuando se presente la expedición del acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración, para que se otorgue dicha presunción debe probarse el supuesto de hecho que la misma contiene (artículo 166 C.G.P.). Este criterio ha sido pacífico en la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado frente a la acción de repetición, el cual se trae a colación en los siguientes términos:

(...) Como se expuso, quien alegue en su favor una presunción deberá probar plenamente y, a través de medios conducentes, pertinentes y eficaces, los hechos que le dan su origen, puesto que resulta claro que el legislador no pugnó por una suerte de tarifa legal para acreditar aquel supuesto fáctico”.

En efecto, las presunciones establecidas en la ley solo serán procedentes y se tendrán por ciertas cuando los *“hechos en que se funden estén debidamente probados”* pero *“admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice”*.

(...) En ese orden de ideas, la entidad pública perjudicada con una condena judicial podrá allegar al proceso de repetición cualquier medio probatorio con el fin de acreditar el hecho que le da base a la presunción que imputa al demandado, pero no servirá probarlo a través de indicios, puesto que aquello es inoperante por la máxima *praesumpto non admititur* (no es admisible presunción de presunción) en tanto que:

*“Para que el juez considere cierto un hecho fundado exclusivamente en esa clase de presunciones obtenidas de indicios o de otras pruebas, con ayuda de la sana crítica, es indispensable que la conclusión adoptada resulte precisa e ineludible. Esto significa que el razonamiento debe ser claro y exacto, por lo cual debe partir de una base segura: la máxima general de experiencia en que se basa esa presunción. Si en lugar de esta, se parte de otra presunción anterior, el argumento probatorio se convierte en una cadena de silogismos, en un sorites, como lo definen los lógicos, y la conclusión ya no será inequívoca, precisa y exacta, por lo que no podrá existir certeza necesaria para que el juez la adopte”*<sup>1</sup>. Subrayado propio)

*“Para la Sala resulta necesario dejar claro que el hecho que le da sustento a la presunción debe estar completamente probado y no debe dar lugar a duda alguna, para ello podrá acudirse a una valoración integral de las pruebas que obran en el expediente sin que, tal como lo ha precisado la jurisprudencia<sup>2</sup>, pueda establecerse únicamente de la sentencia del proceso antecedente todos los elementos que le dan sustento al supuesto fáctico”*<sup>3</sup>. (Subrayado propio)

<sup>1</sup> Hernando Devis Echandía, *Teoría general de la prueba judicial*, Tomo II, 687 - 688.

<sup>2</sup> Al respecto, se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2006, exp. 28448. M.P Ruth Stella Correa Palacio.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, SCA, ST, Subsección A, Sentencia de 20 de febrero de 2020, Radicación 63001-23-31-000-2006-00745-01(59290), C.P. María Adriana Marín

2. Así las cosas, no basta con señalar que la actuación del agente es dolosa porque se anuló el acto administrativo por falsa motivación como lo hace la parte demandante, pues se requiere, la comprobación del motivo por el cual se produjo dicha falsa motivación y la actuación consciente del agente en la realización de la violación a la Ley. Así lo ha establecido el Consejo de Estado en su jurisprudencia, al señalar que:

“La Sala debe precisar que la sentencia condenatoria que da lugar a la demanda de repetición no constituye plena prueba de la conducta gravemente culposa de los demandados. Cabe decir que la decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad **no ata al juez de la repetición, ya que, como lo ha sostenido esta Sección**<sup>4</sup>, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino sobre la conducta del agente”. (Subrayado y negrillas propios)

“En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al ejercicio de la acción de repetición, la condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente al de la referencia **no implica automáticamente la responsabilidad del agente o ex agente estatal que eventualmente hubiere dado lugar a la misma o que hubiere participado en los hechos correspondientes, pues la conducta que se le endilga a este debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el respectivo proceso de repetición**<sup>5</sup>. (Subraya y negrillas propios)

“Como ya se dijo, la sentencia por la que se repite, a lo sumo, podría servir de punto de partida para determinar cuál es el hecho o la conducta que se predicen constitutivas de dolo o culpa”<sup>6</sup>.

**Este precedente tiene especial relevancia porque realiza el análisis del argumento de la parte demandante (responsabilidad por el simple hecho de haberse dado la nulidad del acto administrativo) y lo desecha al indicarse que una cosa es el juicio de legalidad y otra es el juicio de responsabilidad, máxime cuando dentro de la sentencia de nulidad no se hace un análisis de la conducta de los agentes estatales (como ocurre en el presente caso).**

3-Asimismo, es pertinente señalar que la Ley 678 de 2001 en su artículo 5 señaló la definición de Dolo incorporando en ella dos elementos: un elemento volitivo (querer la realización) y otro elemento cognoscitivo (conocer que el hecho es ajeno a las finalidades del servicio), para que se dé la condena en contra del agente. De manera parecida, el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 señaló la definición de Conducta Gravemente Culposa incorporando en ella la exigencia de un error inexcusable, ya sea por la vía de la violación directa de la Constitución o la Ley, o por la omisión o extralimitación en sus funciones.

En el presente caso, no se da ninguno de los elementos señalados en la Ley pues la anulación de la decisión se da, por no haberse justificado los actos administrativos en la causal que para el Juez de Segunda Instancia se adecuaba más a los hechos, y no por la conducta de los agentes que participaron en la generación de los Actos Administrativos anulados.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, expediente 41001233100019980000101 (29.222).

<sup>5</sup> Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 33.450, y del 22 de julio de 2009, expediente 22.779, ambas con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez.

<sup>6</sup> Consejo de Estado, SCA, ST, Subsección A, Sentencia de 5 de marzo de 2020, Radicación 25000-23-26-000-2012-01097-01(56485) A, C.P. María Adriana Marín.

Claramente lo señala la Sentencia del Consejo de Estado que sirvió de base para la presente acción, al indicar que ***“la causal que debió imputársele de acuerdo a la justificación esbozada por la autoridad aduanera para proferir los actos demandados era la del numeral 1.25 del mismo Estatuto, pero ello no fue lo que ocurrió”***.

Así las cosas, es claro que la actuación de mi mandante no se enmarca ni dentro de la definición del dolo, ni dentro de la conducta gravemente culposa que define la Ley.

4. Mí representando desconoce quien tuvo el manejo del expediente interno y efectuó las anotaciones en el acta.

### PRUEBAS

1. Documentales Aportadas:

- 1.1. Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
- 1.2. Certificado de Antecedentes Fiscales.
- 1.3. Certificado de Funciones.

2. Testimonial,

Decretar el testimonio de la Dra. GLORIA AMPARO ARBOLEDA HENAO identificada con la cedula de ciudadanía número 31.889.855, para que rinda testimonio sobre asuntos de la demanda, puede citarse en la Cr. 3 No 10 – 60 Piso 8 Edificio DIAN de Cali.

3. Todas las aportadas con la demanda, que se encuentren en el expediente.

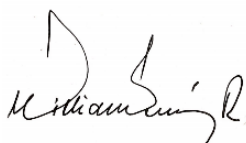
### ANEXOS

1. Los documentos señalados en el acápite de pruebas.
2. Copia de la presente para la parte demandante, y el archivo del Juzgado.

### NOTIFICACIONES

- El suscrito las recibirá en su oficina en la Av 5 Nte No 51 N 49 de Cali, correo: williamjimenezr3h@hotmail.com Cel: 316 743 8823

Atentamente,



William Jiménez Ríos  
C.C. No. 6.096.251  
T.P. No. 11.915 C.S. de la J.  
Correo: williamjimenezr3h@hotmail.com  
Cel: 316 743 8823





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 146814304



WEB  
20:41:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INOCENCIO GRANADOS SANABRIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7219967:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)  
Línea gratuita 018000910315, [dcap@procuraduria.gov.co](mailto:dcap@procuraduria.gov.co)  
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1, Pbx 5878750 ext. 13105, Bogotá D.C.  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 30 de junio de 2020, a las 20:44:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	7219967
Código de Verificación	7219967200630204421

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL  
DE LA U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**

**C E R T I F I C A**

Que **Inocencio Granados Sanabria**, identificado con la cédula de ciudadanía No 7.219.967, se vinculó con carácter de supernumerario a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el 16 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2011, nombrado como Empleado Planta Temporal el 03 de enero de 2012 al 21 de enero de 2018, como Provisional de la Planta Global a partir del 22 de enero de 2018, actualmente se encuentra desempeñando el cargo de **Gestor I Código 301 Grado 01**, ubicado en el Grupo Interno de Trabajo de Control, Carga y Tránsitos de la División de Gestión Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas Cali.

**Que, durante el periodo comprendido como Supernumerario entre los años 2004 al 2008, se desempeñó así:**

Del 12 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2008, en el Grupo Interno de Trabajo de Definición de Situación Jurídica de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Gestor I Código 301 Grado 01**, exclusivamente para efectos salariales.

Del 14 de noviembre de 2008 al 11 de diciembre de 2008, en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Gestor I Código 301 Grado 01**, exclusivamente para efectos salariales.

Del 31 de enero de 2008 al 13 de noviembre de 2008, en la División Jurídica Aduanera de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Profesional en Ingresos Públicos I Nivel 30 Grado 19**, exclusivamente para efectos salariales.

Del 02 de enero de 2008 al 30 de enero de 2008, en el Grupo de Infracciones Aduaneras de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Profesional en Ingresos Públicos I Nivel 30 Grado 19**, exclusivamente para efectos salariales.

Del 15 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, en el Grupo de Infracciones Aduaneras de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Profesional en Ingresos Públicos I Nivel 30 Grado 19**, exclusivamente para efectos salariales.

Del 03 de enero de 2007 al 14 de febrero de 2007, en la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Profesional en Ingresos Públicos I Nivel 30 Grado 19**, exclusivamente para efectos salariales.

Del 01 de diciembre de 2005 al 31 de diciembre de 2006, en la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Profesional en Ingresos Públicos I Nivel 30 Grado 19**, exclusivamente para efectos salariales.

Del 24 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2005, en la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Profesional en Ingresos Públicos I Nivel 30 Grado 19**, exclusivamente para efectos salariales.

Del 16 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004, en la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Cali, referenciado a la nomenclatura de **Profesional en Ingresos Públicos I Nivel 30 Grado 19**, exclusivamente para efectos salariales.

Con las siguientes actividades desempeñadas durante el periodo antes mencionado, información encontrada en la historia laboral:

1. Realizar reconocimiento y avalúo de mercancías aprehendidas que se encuentren en el depósito de convenio.
2. Elaborar el DIM (Documento de Ingreso de Mercancías) teniendo en cuenta la responsabilidad, condiciones y requisitos establecidos en la Orden Administrativa 003 del 23 de marzo de 2001 de la Secretaria General y Subsecretaria Comercial.

Esta certificación se elabora con base a la información encontrada en la Historia Laboral y se expide a solicitud del interesado, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2020.



**Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo**

*Aprobó: Luz Mary Gómez Ortiz.*

*Proyectó: Leidy Marcela Rojas Velásquez LR*